

No. 14668. Multilateral

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series*, vol. 999, I-14668.]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Peru

Notification effected with the Secretary-General of the United Nations: 4 March 2015

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 4 March 2015

Nº 14668. Multilatéral

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités*, vol. 999, I-14668.]

NOTIFICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU PARAGRAPHE 3

Pérou

Notification effectuée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 4 mars 2015

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 4 mars 2015

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**Misión Permanente del Perú
ante las Naciones Unidas**

**Permanent Mission of Peru
to the United Nations**

7-1-SG / *17*

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas – Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene a honra informar que, mediante Decreto Supremo N° 057-2014-PCM publicado el 11 de septiembre de 2014, cuya copia se acompaña, se declara por sesenta días, a partir de la fecha antes indicada, el Estado de Emergencia declarado en los distritos de Ramón Castilla y Yavarí, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, contemplados en los incisos 9, 11, 12 y 24(f) del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú, y en los Artículos 17º, 12º, 21º y 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, con el motivo de consolidar la pacificación de la zona y del país.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas aprovecha la oportunidad para renovar a la Secretaría General de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 03 de marzo de 2015

Declaran el Estado de Emergencia en los distritos de Ramón Castilla y Yavari, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto

**DECRETO SUPREMO
N° 057-2014-PCM**

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO.

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, decretado en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, las operaciones policiales antidrogas ejecutadas por la Policía Nacional del Perú y sus pares de Colombia y Brasil, dan cuenta del incremento del tráfico ilícito de drogas en las zonas fronterizas limítrofes, principalmente en el ámbito de Putumayo (Angaitza, Güepí y El Estrecho), y también en el Bajo Amazonas (Caballococha, Santa Rosa y Valle del Yavari), provincia de Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto; donde se han producido ataques a las fuerzas del orden por parte de las organizaciones criminales que operan en dichas zonas, causando en muchos casos el deceso de miembros de la Policía Nacional del Perú;

Que, de acuerdo a lo informado por las dependencias especializadas de la Policía Nacional del Perú, se ha incrementado la incautación de drogas, insumos químicos y hallazgos de laboratorios de procesamiento de drogas y cocaína en las circunscripciones antes citadas, debido a una importante concentración de cultivos ilegales de coca en los poblados ubicados en estas zonas;

Que, en dicho contexto, el "Plan Anual de Reducción del Espacio Coccalero ilegal en el Perú 2014", aprobado por Resolución Ministerial N° 065-2014-IN/DGCO, contempla la ejecución de acciones de reducción y destrucción de cultivos y almacenes de coca en la Región Loreto, dentro de la cual se considera al sector Caballococha, con la finalidad de obtener la reducción de un total de 3,500 hectáreas de plantaciones ilegales de coca, impidiendo la expansión de nuevas áreas coccaleras en el país, que sirvan como insumo para la elaboración de drogas ilegales;

Que, mediante Informe N° 006-2014-REGPOL ORIENTE/EM-UNIPLO/SEC, el Jefe de la Región Policial Oriente solicita que se declare el Estado de Emergencia en los distritos de Ramón Castilla y Yavari, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto, a fin de reforzar la labor policial en dichas zonas para combatir de manera efectiva el tráfico ilícito de drogas,

así como reducir los índices de criminalidad vinculados al desarrollo de las actividades de producción, transporte y comercialización de drogas ilícitas; con el propósito de lograr los objetivos trazados por el Gobierno Central, relacionados con la consolidación de la pacificación de dichas zonas y del país, y el desarrollo de cultivos alternativos para sustituir la economía basada en el sembrío ilegal de la hoja de coca;

Que, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas constituye una política de Estado en el Perú, por ser una amenaza a la seguridad y al tener efectos devastadores en lo social, económico, medio ambiental y político;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118 y el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia
Declarar por el término de sesenta (60) días calendario, a partir de la fecha, el Estado de Emergencia en los distritos de Ramón Castilla y Yavari, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del Orden Interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en las circunscripciones señaladas en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartados f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú

Artículo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de setiembre del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ANA JARA VELÁSQUEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministro de Defensa

DANIEL URRESTI ELERA
Ministro del Interior

DANIEL FIGALLO RIVADENEYRA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 057-2014-PCM, issued on 11 September 2014 (copy attached), a state of emergency was declared in the Districts of Ramón Castilla and Yavarí in the Province of Mariscal Ramón Castilla, Department of Loreto, for 60 days as from that date.

During the state of emergency, the rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17, 12, 21 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, will be suspended in order to consolidate peace in the area and in the country as a whole.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the United Nations Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 3 March 2015

Declaration of a state of emergency in the Districts of Ramón Castilla and Yavarí in the Province of
Mariscal Ramón Castilla, Department of Loreto

Supreme Decree No. 057-2014-PCM

The President of the Republic,

Considering:

That article 44 of the Political Constitution of Peru provides that the primary duties of the State include guaranteeing the full enjoyment of fundamental rights, protecting the population from security threats and promoting the general welfare based on justice and the comprehensive and balanced development of the nation;

That, furthermore, article 137 of the Constitution provides that the President of the Republic may, with the consent of the Council of Ministers and upon notifying Congress or the Standing Committee, declare the states of emergency stipulated therein, for a fixed duration and throughout the national territory or in a part thereof, including a state of emergency declared in the event of a disturbance of the peace or of public order, a disaster, or serious circumstances affecting the life of the nation, during which time the exercise of the constitutional rights of liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement in the territory may be restricted or suspended;

That police anti-narcotics operations carried out by the National Police of Peru and its counterparts in Colombia and Brazil have shown that illicit drug trafficking has increased in the area where the borders of the three countries meet, primarily in the areas of Putumayo (Angusilla, Güepi and El Estrecho) and the lower Amazon (Caballococha, Santa Rosa and the Yavarí Valley) in the Province of Mariscal Ramón Castilla, Department of Loreto, where there have been attacks against law enforcement officers by criminal organizations operating in these areas, in many cases resulting in the deaths of members of the National Police of Peru;

That, according to information from the specialized branches of the National Police of Peru, there has been an increase in the confiscation of drugs and chemical inputs and in the discovery of drug and cocaine processing laboratories in the areas referred to, owing to high concentrations of illegal coca crops in settlements located in these areas;

That, in that context, the 2014 Plan for Reduction of the Area under Illegal Coca Cultivation in Peru, approved by Ministerial Resolution No. 065-2014-IN/DGCO, provides for the implementation of measures to reduce and destroy coca crops and stocks in the Loreto region, which includes the Caballococha sector, in order to achieve an overall reduction of 3,500 hectares of illegal coca plantations so as to prevent the expansion of coca cultivation to new areas of the country and cut off the supply of inputs for the production of illegal drugs;

That, by report No. 006-2014-REGPOL ORIENTE/EM-UNIPLO/SEC, the Chief of the Eastern Police Region requests that a state of emergency be declared in the Districts of Ramón Castilla and Yavarí, in the Province of Mariscal Ramón Castilla, Department of Loreto, in order to strengthen police capacity in those areas to effectively address illicit drug trafficking and reduce the rate of crime related to illicit drug production, transport and sale, in order to achieve the goals outlined by the central

Government in relation to the consolidation of peace in these parts of the country and the development of alternative crops to replace the economy based on illegal coca leaf cultivation;

That combating illicit drug trafficking is a matter of State policy in Peru, as it represents a threat to security and has devastating social, economic, environmental and political impacts;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, and article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru, and article 4, paragraphs 2 (b) and 2 (d), of Act No. 29158, the Organic Law of the Executive Branch; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic,

Hereby decrees:

Article 1: Declaration of a state of emergency

A state of emergency is hereby declared in the Districts of Ramón Castilla and Yavari, in the Province of Mariscal Ramón Castilla, Department of Loreto, for a period of sixty (60) calendar days, with effect from the date hereof. The National Police of Peru shall maintain public order with the support of the armed forces.

Article 2: Suspension of constitutional rights

During the state of emergency and in the locations referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home, and freedom of assembly and movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3: Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 10 September 2014.

Ollanta Humala Tasso
Constitutional President of the Republic

Ana Jara Velásquez
President of the Council of Ministers

Pedro Cateriano Bellido
Minister of Defence

Daniel Urresti Elera
Minister of the Interior

Daniel Figallo Rivadeneira
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer que le décret suprême no 057-2014-PCM, publié le 11 septembre 2014, et dont le texte est joint à la présente, déclare, pour une durée de 60 jours commençant à la date susmentionnée, l'état d'urgence dans les districts de Ramón Castilla et de Yavari de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto).

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence, et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l'exercice des droits à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 3 mars 2015

Déclaration de l'état d'urgence dans les districts de Ramón Castilla et de Yavari de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto)

Décret suprême no 057-2014-PCM

Le Président de la République

Considérant :

Que l'article 44 de la Constitution politique du Pérou dispose que l'État est tenu de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux, de protéger la population des risques menaçant sa sécurité et de veiller au bien-être général, fondé sur la justice et le développement intégral et équilibré de la nation;

Que l'article 137 de la Constitution accorde au Président de la République le droit de décréter, avec l'accord du Conseil des ministres et pour une durée déterminée, l'état d'urgence sur la totalité ou sur une partie du territoire, le Congrès ou la Commission permanente devant être informé des états d'exception mentionnés dans l'article précité, notamment l'état d'urgence, décrété en cas de troubles de la paix ou de l'ordre intérieur, en cas de catastrophe ou dans des circonstances graves qui troublent la vie de la nation, et au cours duquel est limité ou suspendu l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire;

Que les opérations de lutte antidrogue menées par la Police nationale péruvienne et les polices colombienne et brésilienne reflètent une hausse du trafic de stupéfiants dans les zones frontalières entre les trois pays, principalement dans la région de Putumayo (Angusilla, Güeppi et El Estrecho) et dans le Bajo-Amazonas (Caballococha, Santa Rosa et Valle del Yavari), dans la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto), où les organisations criminelles ont mené des attaques contre les forces de l'ordre, faisant de nombreux morts parmi les membres de la Police nationale péruvienne;

Que, d'après les informations communiquées par les équipes spécialisées de la Police nationale péruvienne, le nombre de saisies de drogues et de produits chimiques, ainsi que de démantèlements de laboratoires de fabrication de drogues et de cocaïne a augmenté dans les circonscriptions précitées du fait d'une forte concentration de plantations illicites de coca dans les villages qui s'y trouvent;

Que, dans ce contexte, le Plan annuel 2014 de réduction des zones de cultures illicites de coca au Pérou, adopté par la décision ministérielle no 065-2014-IN/DGCO, prévoit la destruction des cultures et des semis de coca dans la région de Loreto, où se trouve le secteur de Caballococha, afin de réduire la superficie des plantations illégales de coca de 3 500 hectares et d'empêcher la création de nouvelles zones de production de coca destinées à la fabrication de drogues illicites;

Que, par le rapport no 006-A-2014-REGPOL ORIENTE/EM-UNIPLO/SEC, le Chef de la police de la région ouest avait demandé que l'état d'urgence soit décrété dans les districts de Ramón Castilla et de Yavari de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto) afin de garantir la continuité des opérations fluviales, terrestres et aériennes menées contre le trafic illicite de stupéfiants, ainsi que de réduire la criminalité liée aux activités de production, de transport et de commercialisation des drogues illicites et d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement en matière de pacification des zones précitées et du pays, ainsi que de développement de cultures de substitution

dans le but de mettre fin à une économie fondée sur la culture illégale de coca;

Que la lutte contre le trafic de stupéfiants s'inscrit dans la politique de l'État péruvien, car ce trafic représente une menace dans la mesure où il a des effets dévastateurs sur les plans social, économique, environnemental et politique;

Conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 14 de l'article 118, du paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, et du paragraphe 2 b) et d) de l'article 4 de la loi no 29158 (loi relative à l'organisation du pouvoir exécutif);

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé;

Décète :

Article 1 – Déclaration de l'état d'urgence

Est déclaré l'état d'urgence pour une durée de soixante (60) jours calendaires commençant ce jour dans les districts de Ramón Castilla et de Yavari de la province de Mariscal Ramón Castilla (département de Loreto). La Police nationale péruvienne maintiendra l'ordre public avec l'aide des forces armées.

Article 2 – Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence mentionné à l'article 1 et dans les circonscriptions y visées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, garantis aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 – Contresign

Le présent décret suprême est contresigné par la Présidente du Conseil des ministres, le Ministre de la défense, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le dix septembre deux mille quatorze.

Le Président de la République
Ollanta Humala Tasso

La Présidente du Conseil des ministres
Ana Jara Velásquez

Le Ministre de la défense
Pedro Cateriano Bellido

Le Ministre de l'intérieur
Daniel Urresti Elera

Le Ministre de la justice et des droits de l'homme
Daniel Figallo Rivadeneyra

SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS, AIMING AT THE
ABOLITION OF THE DEATH PENALTY.
NEW YORK, 15 DECEMBER 1989 [*United
Nations, Treaty Series*, vol. 1642, A-14668.]

DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF SE
RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
VISANT À ABOLIR LA PEINE DE MORT.
NEW YORK, 15 DÉCEMBRE 1989 [*Nations
Unies, Recueil des Traités*, vol. 1642, A-14668.]

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
EL SALVADOR UPON ACCESSION

Germany

*Notification deposited with the Secretary-
General of the United Nations: 31 March
2015*

*Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 31 March
2015*

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
EL SALVADOR LORS DE L'ADHÉSION

Allemagne

*Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 31 mars 2015*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 31 mars 2015*

[GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND]

Die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen beehrt sich, unter Bezugnahme auf die Verwahrmotifikation C.N. 201.2014.TREATIES-IV.12 vom 8. April 2014 hinsichtlich des bei Beitritt zum Zweiten Fakultativprotokoll vom 15.12.1989 zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe erklärten Vorbehalts Folgendes mitzuteilen:

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat den von der Republik El Salvador bei Beitritt zum Zweiten Fakultativprotokoll vom 15.12.1989 zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe erklärten Vorbehalt sorgfältig geprüft.

Sie verweist darauf, dass die vollständige Abschaffung der Todesstrafe Ziel und Zweck des Fakultativprotokolls ist und dass nach Artikel 2 des Fakultativprotokolls Vorbehalte nicht zulässig sind mit der einen Ausnahme eines Vorbehalts, der die Anwendung der Todesstrafe in Kriegszeiten aufgrund einer Verurteilung wegen eines in Kriegszeiten begangenen besonders schweren Verbrechens militärischer Art vorsieht. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist der Auffassung, dass der Vorbehalt der Republik El Salvador über den Rahmen von Artikel 2 des Fakultativprotokolls hinausgeht, da er die Anwendbarkeit der Todesstrafe nicht ausdrücklich auf besonders schwere Verbrechen militärischer Art beschränkt. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist daher der Auffassung, dass der Vorbehalt der Republik El Salvador mit Ziel und Zweck des Fakultativprotokolls nicht vereinbar ist und folglich als unzulässig anzusehen ist.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland legt daher Einspruch gegen diesen Vorbehalt ein. Dieser Einspruch schließt das Inkrafttreten des Zweiten Fakultativprotokolls vom 15.12.1989 zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik El Salvador nicht aus.

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section and, with reference to depositary notification C.N. 201.2014.TREATIES-IV.12 dated April 8, 2014 regarding the reservation made by the Republic of El Salvador upon its accession to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the Abolition of the Death penalty of 15 December 1989, has the honour to communicate the following:

The Government of the Federal Republic of Germany has carefully examined the reservation made by the Republic of El Salvador upon its accession to the Second Optional Protocol.

It recalls, that the complete abolition of the death penalty is the object and purpose of the Second Optional Protocol, and that according to Article 2 reservations are not permissible with the one exception of a reservation that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during war time. The Government of the Federal Republic of Germany believes that the reservation made by the Republic of El Salvador goes beyond the limits of Article 2 of the Optional Protocol, as it does not explicitly limit the application of the death penalty to the most serious crimes of a military nature. The Government of the Federal Republic of Germany therefore considers the reservation made by the Republic of El Salvador to be incompatible with the object and purpose of the Second Optional Protocol and that it consequently has to be considered impermissible.

The Government of the Federal Republic of Germany therefore objects to this reservation. This objection shall not preclude the entry into force of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the Abolition of the Death Penalty of 15 December 1989 between the Federal Republic of Germany and the Republic of El Salvador.

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités et, se référant à la notification dépositaire C.N. 201.2014.TREATIES-IV.12 en date du 8 avril 2014 concernant la réserve que la République d'El Salvador a faite lors de son adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté le 15 décembre 1989, a l'honneur de communiquer ce qui suit :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a attentivement examiné la réserve que la République d'El Salvador a faite lors de son adhésion au deuxième Protocole facultatif.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne rappelle que le deuxième Protocole facultatif a pour objet et but l'abolition complète de la peine de mort et que, aux termes de son article 2, aucune réserve n'est admise en dehors de la réserve prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre. Il estime que la réserve faite par la République d'El Salvador, en ce qu'elle ne limite pas expressément l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire revêtant une gravité extrême, dépasse le cadre de l'article 2 du Protocole facultatif. Il considère en conséquence que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but du deuxième Protocole facultatif et qu'elle ne peut dans ces conditions être admise.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à cette réserve. La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur, entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'El Salvador, du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté le 15 décembre 1989. La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur, entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'El Salvador, du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté le 15 décembre 1989.

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
EL SALVADOR UPON ACCESSION

Norway

*Notification deposited with the Secretary-
General of the United Nations: 30 March
2015*

*Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 30 March
2015*

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
EL SALVADOR LORS DE L'ADHÉSION

Norvège

*Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 30 mars 2015*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 30 mars 2015*

[ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS]

The Permanent Mission of Norway to the United Nations presents its compliments to the Secretary-General of the United Nations, and, with reference to Depositary Notification C.N.201.2014.TREATIES-IV.12, has the honour to inform that the Government of Norway has examined the reservation made by the Government of El Salvador upon its accession to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty.

The Government of Norway recalls that, pursuant to paragraph 1 of article 2, of the Optional Protocol, no reservation is permitted except for a reservation that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime. The Government of Norway notes that the reservation made by El Salvador goes beyond those situations where a reservation is permitted in accordance with paragraph 1 of article 2 of the Optional Protocol as the reservation does not explicitly limit the application of the death penalty to the most serious crimes of a military nature committed during wartime.

The Government of Norway therefore objects to the reservation made by the Republic of El Salvador. This objection does not preclude the entry into force of the Second Optional Protocol, in its entirety, between Norway and El Salvador. The Second Optional Protocol thus becomes operative between Norway and the Republic of El Salvador without El Salvador benefiting from the aforesaid reservation.

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente de la Norvège auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et, se référant à la notification dépositaire C.N.201.2014.TREATIES-IV.12, a l'honneur de l'informer que le Gouvernement norvégien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement salvadorien lors de son adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Rappelant que, selon le paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole facultatif, aucune réserve n'est admise en dehors de celle prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre, le Gouvernement norvégien fait observer que la réserve formulée par la République d'El Salvador outrepassse le champ d'application du paragraphe en question car elle ne limite pas expressément l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire d'une gravité extrême commis en temps de guerre.

Le Gouvernement norvégien fait donc objection à la réserve formulée par El Salvador. Cette objection n'empêche toutefois pas l'entrée en vigueur de l'ensemble du deuxième Protocole facultatif pour la Norvège et El Salvador. Le Protocole prend donc effet sans qu'El Salvador puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
EL SALVADOR UPON ACCESSION

Poland

Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations: 27 March 2015

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 27 March 2015

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
EL SALVADOR LORS DE L'ADHÉSION

Pologne

Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 27 mars 2015

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 27 mars 2015

[ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS]

The Government of the Republic of Poland has examined the reservation made by [the] Republic of El Salvador upon accession to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty, adopted in New York on December 15, 1989.

The Government of the Republic of Poland notes that the purpose and object of the Protocol is the complete abolition of the death penalty and that no reservation is admissible, except for a reservation which provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime.

While making the reservation [the] Republic of El Salvador invoked the article 27 of its Constitution, which refers to unspecified military laws. The Government of the Republic of Poland notes that [the] Republic of El Salvador refers in its reservation to the domestic legislation possibly affecting the application of the Protocol, including the admissibility of application of death penalty, without specifying the exact content of this legislation. As a result, it is impossible to clearly define the extent to which the reserving State will accept the application of the death penalty and if such an application will be limited to the most serious crimes of a military nature committed during wartime. Thus the reservation is not compatible with the art. 2 of the Protocol and it is incompatible with the object and purpose of the Protocol. According to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation that is incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted.

Therefore, the Government of the Republic of Poland objects to the reservation made by [the] Republic of El Salvador upon accession to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty and considers the reservation null and void.

This objection does not preclude the entry into force of the Covenant between the Republic of El Salvador and [the] Republic of Poland.

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve que la République d'El Salvador a formulée lors de son adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989.

Le Gouvernement de la République de Pologne note que le Protocole a pour but et objet l'abolition totale de la peine de mort et qu'il ne sera admis aucune réserve, en dehors de la réserve prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

Dans sa réserve, la République d'El Salvador invoque l'article 27 de sa constitution, qui fait référence à des lois militaires indéterminées. Le Gouvernement de la République de Pologne note que la République d'El Salvador se réfère à la législation interne susceptible d'avoir un effet sur l'application du Protocole, y compris sur l'admissibilité de l'application de la peine de mort, sans préciser la teneur exacte de cette législation. Par conséquent, il est impossible de déterminer clairement dans quelle mesure l'État réservataire acceptera l'application de la peine de mort et si une telle application sera limitée aux crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre. La réserve est donc incompatible avec l'objet et le but du Protocole et notamment avec son article 2. Selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas admises.

En conséquence, le Gouvernement de la République de Pologne fait objection à la réserve que la République d'El Salvador a formulée lors de son adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et la considère nulle et non avenue.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République d'El Salvador et la République de Pologne.

*OBJECTION TO THE RESERVATION MADE BY
EL SALVADOR UPON ACCESSION*

Switzerland

*Deposit of instrument with the Secretary-
General of the United Nations: 6 March
2015*

*Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 6 March 2015*

*OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR
EL SALVADOR LORS DE L'ADHÉSION*

Suisse

*Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 6 mars 2015*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 6 mars 2015*

[FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS]

Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador lors de la ratification du Deuxième Protocole facultatif du 15 décembre 1989 se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Le Conseil fédéral rappelle que, selon l'article 2, chiffre 1 du Protocole, aucune réserve ne sera admise en dehors de la réserve prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre. Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve ne remplit pas ces conditions de validité en ne limitant pas la peine de mort en temps de guerre à des crimes d'extrême gravité. Cette limitation ne ressort ni de la norme constitutionnelle citée dans la réserve ni des lois militaires auxquelles il est fait référence.

Il est dans l'intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.

Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République d'El Salvador. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole, dans son intégralité, entre la République d'El Salvador et la Suisse.

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Swiss Federal Council has examined the reservation made by the Government of the Republic of El Salvador upon ratification of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, adopted on 15 December 1989.

The Federal Council recalls that, pursuant to article 2, paragraph 1, of the Protocol, no reservation is admissible except for a reservation that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime. The Swiss Federal Council believes that the reservation does not meet those conditions of validity as it does not limit the death penalty in time of war to the most serious crimes. Neither the article of the constitution quoted in the reservation nor the military laws to which it refers indicate such a limitation.

It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become parties are respected by all parties, and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their treaty obligations.

The Swiss Federal Council objects to the reservation made by the Republic of El Salvador. This objection does not preclude the entry into force of the Protocol, in its entirety, between the Republic of El Salvador and Switzerland.